

EL CASO SOQUIMICH. CIPER 4.4.2015

II.1.- 74 PERSONAS QUE EL SII INVESTIGA POR PAGOS POLÍTICOS DE SQM TIENEN NEXOS CON LA UDI Y RN. CIPER

La nómina de 172 contribuyentes que el SII pide al Ministerio Público investigar por pagos de SQM sin respaldo, fue rastreada por CIPER para identificar sus vínculos políticos: 59 personas tienen nexos con la UDI y 15 con RN. La UDI es el partido con más boletas que habrían sido usadas para financiar campañas. Algunos de los implicados ya reconocieron que no hicieron trabajos para SQM y que sus pagos fueron triangulados por entidades gremialistas, como la Fundación Chile Justo, fundada por Pablo Longueira. La denuncia abre una nueva veta sobre pagos ilícitos de empresas pesqueras y otras compañías.

El próximo viernes 10 de abril la UDI tendrá la reunión más importante del último tiempo: el Consejo General que debe determinar la nueva directiva que conducirá a ese partido en medio de la grave crisis que desató el descubrimiento de los aportes ilegales que le entregó el Grupo Penta. Y aunque la mayoría de sus dirigentes sabía que la indagación de la arista Soquimich (SQM) del financiamiento ilegal a la política seguiría remeciendo, esta vez a casi todos los partidos, nadie en la UDI imaginó la magnitud de lo que se venía con la ampliación de la denuncia de Impuestos Internos (SII), presentada este jueves 2 de abril.

A los nombres de los ya implicados por la indagación judicial de Penta –Joaquín Lavín, Jovino Novoa, Ernesto Silva, Ena Von Baer, Iván Moreira, Felipe de Mussy, Pablo Wagner y Pablo Zalaquett- se agregan ahora contundentes acusaciones que involucran a 59 personas vinculadas a la UDI, que CIPER identificó ([vea esa nómina](#)). Entre ellas, aparecen dirigentes históricos de ese partido con millonarias sumas que habrían sido desviadas desde Soquimich para financiar campañas políticas.



La veta abierta por SQM ha puesto en la mira de Impuestos Internos y de la Fiscalía a otras importantes empresas que ocuparon la misma vía de las boletas falsas para financiar a dirigentes históricos de la UDI, como Pablo Longueira. Una nueva arista que arrastra a otros importantes dirigentes gremialistas, familiares y colaboradores de estos candidatos. Una verdadera máquina de financiamiento de campañas.

La suma de las boletas cuestionadas por el SII emitidas por contribuyentes vinculados a la UDI, en total sobrepasan los \$536 millones. Ello, sin contar los dineros que fueron presumiblemente desviados desde SQM a entidades relacionadas con el gremialismo, como la **Corporación de Asuntos Públicos** (que facturó \$131 millones a SQM) el **Centro de Estudios Nueva Minería** (controlada por **Cristián Leay**) y la **Fundación Chile Justo** (creada por Pablo Longueira).



La nueva denuncia del SII significa también otro remezón para la UDI en la víspera de su consejo general clave. Y ello porque entre los nuevos investigados por emitir boletas falsas para SQM figura la esposa del diputado **Javier Macaya**, quien asumió la presidencia interina tras la renuncia de Ernesto Silva.

Constanza Del Pilar Farías Prieto, cónyuge del diputado Macaya, emitió boletas para SQM por **\$4,5 millones**. La abogada fue jefa de la División de Carabineros del Ministerio del Interior desde junio de 2011 hasta mayo de 2012. Su nombre surgió del rastreo realizado en el Servicio de Impuestos Internos a la documentación contable de SQM que esa misma empresa puso a disposición del organismo tributario. Ahora, Constanza Farías deberá demostrar judicialmente si efectivamente hizo asesorías para SQM y en qué rubro.

Entre los nombres relacionados a la UDI que figuran en la nueva denuncia del SII, aparecen algunos que ya están siendo investigados por los fiscales en la indagatoria al Grupo Penta, como el de **María Carolina de la Cerda**, cuñada de Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería que permanece en prisión preventiva. En el arqueo realizado por el SII, ella suma en total **\$7,5 millones** en boletas para SQM.



De la nómina presentada por el SII, CIPER hizo un rastreo de nexos y conexiones que involucran a la UDI. También aparecen otros 14 personas que CIPER identificó como vinculadas a Renovación Nacional.

EL ENTORNO DE LONGUEIRA

En la investigación abierta por la Fiscalía y el SII sobre financiamiento ilegal de la política proveniente de SQM, han aparecido nombres del entorno familiar del ex senador, ex ministro y ex precandidato presidencial de la UDI, **Pablo Longueira**. A fines de febrero se supo que un hijo del histórico dirigente gremialista figura en la nómina de personas que emitieron boletas a SQM en 2010: José Tomás Longueira Brinkmann, quien recibió \$4,4 millones de la minera, lo que ahora se confirma al aparecer su nombre en la nueva denuncia de Impuestos Internos.

También se suma a la nómina **Loreto Undurraga Casteblanco**, quien está casada con **Francisco José Brinkmann Estévez**, cuñado de Pablo Longueira. Ella entregó boletas por \$14 millones a SQM. Es profesora de educación básica, fue jefa de gabinete de la delegada Provincial de Santiago durante el gobierno de Piñera, donde recibía un sueldo de \$1,3 millones. Loreto Undurraga, quien tiene una empresa de banquetería y dulcería que lleva su nombre, también ha recibido pagos de la UDI, de la **Corporación de Asuntos Públicos** y del **Centro de Estudios Nueva Minería**.

Rubén Carvacho Saéz y su esposa, **Carolina Andrea Chamorro Martínez**, también son nombres conocidos para Longueira. Carvacho es el **ahijado que siempre nombra el ex senador**. Hijo de feriantes, Longueira lo conoció en un campamento y lo apadrinó. Se tituló de abogado gracias a una beca de la Universidad Andrés Bello. Intentó sin éxito convertirse en diputado en las últimas elecciones. En el gobierno de Piñera trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Coordinación de Concesiones del MOP y fue director de la Empresa de Abastecimiento en Zonas Aisladas. Su padre, Rubén Carvacho Rivera, fue un

dirigente de base clave para abrirle a la UDI la puerta de las poblaciones y es concejal por Conchalí. Carvacho Sáez y su esposa recibieron \$5 millones cada uno de SQM.

En la ampliación de la querrela del SII aparecen personas que reconocen haber entregado boletas sin haber hecho trabajos reales para la minera y otras empresas, a petición de estrechos colaboradores de Longueira. **Solange Andrea Hermosilla Chandía** entregó boletas a SQM por \$5 millones. Hermosilla además, percibió en noviembre de 2009 otros honorarios bajo investigación por altos montos, de tres empresas distintas, una de ellas vinculada a Leay. En la indagación reconoció que no realizó trabajo alguno para SQM ni para otras empresas a las que también entregó boletas:

*“Quiero dejar en claro que los servicios nunca los presté, sólo emití la boleta de honorarios (2009), donde fui contactada por ‘Titi’ Valdivieso (**Carmen Luz Valdivieso**), quien al parecer es asesora de Pablo Longueira... El monto líquido (\$5 millones) los recibí el 1 de diciembre de 2009, en mi cuenta corriente del Banco Santander y el día 3 los deposité en la cuenta corriente de ‘Titi’ Valdivieso, de acuerdo a las instrucciones que ella me dio. La primera vez ella me contactó por correo electrónico y luego me llamo por teléfono, pero nunca la conocí en persona... Accedí a lo solicitado por ella, porque estaba recién comenzando a trabajar y no nos pagaban en las fechas que correspondía, pasando dos meses sin recibir sueldo, por lo que no tenía dinero suficiente para mis deudas...”*

Pero Solange Hermosilla no sólo entregó boletas por trabajos no realizados a Soquimich. A pedido de la misma Carmen Luz Valdivieso entregó boletas -cuyos montos estaban destinadas a financiar campañas políticas de la UDI- a la **Pesquera el Golfo** y al **Centro de Estudios Nueva Minería**, en 2009 y 2010. Nunca prestó servicios para ambas entidades y los dineros recaudados recorrieron la misma ruta que los que pagó Soquimich: quedaron en manos de “Titi” Valdivieso.

Entre los nuevos denunciados por el SII, y que también afirman haber emitido boletas ilegales para SQM en una cadena coordinada por la misma asesora de Longueira (“Titi” Valdivieso), aparece el abogado **Ricardo Andrés Jorquera Gutiérrez** con boletas emitidas para SQM por \$ 6 millones. Jorquera era entonces estudiante universitario y en la indagación reconoció que no prestó servicios para SQM y que lo hizo a petición de un compañero. Y agregó: **“Son muchos los compañeros que emitieron boletas, mucho más de 10...”**.

En la nueva nómina de la denuncia del SII aparece también **José Carlos Feres Ducci**, hijo de un ex asesor de Longueira en el Ministerio de Economía: **Carlos Feres Rebolledo**, quien encabezó las negociaciones por la Ley de Pesca y fue presidente de la Empresa Portuaria de Talcahuano. Feres Rebolledo también asesoró a Hernán de Solminihac en el MOP y a Juan Carlos Jobet en el Ministerio del Trabajo. Su hijo recibió honorarios de SQM por \$12 millones.

NEXOS CON PESQUERAS

En la nueva nómina del SII figuran otros nombres relacionados con el sector pesquero. Uno de ellos es **Alfonso Agustín Mora Domínguez**, abogado asociado al estudio Baker & Mackenzie. Mora registra boletas para SQM por \$12 millones y también ha recibido



honorarios de la **Asociación de Industriales Pesqueros** (Asipes), además del **Centro de Estudios Nueva Minería**. Su hermana, **María Loreto Mora Domínguez**, también está incluida en la lista del SII por haber recibido honorarios de SQM por \$16 millones.

Carolina Isabel Gazitúa Larenas es ingeniera en Administración de Empresas y fue asesora del ex senador Jaime Orpis. Paralelamente, prestó servicios a la pesquera del Grupo Angelini, **Corpesca**, empresa que le pagó \$73 millones entre 2008 y 2013. Recibió honorarios de SQM por \$3 millones.

También con honorarios pagados por Corpesca, entre 2008 y 2009, figura la abogada **María Francisca Cuellar Toro**. De SQM recibió \$3 millones. Fue analista del Departamento Jurídico del Serviu de Tarapacá entre 2011 y 2013 y vicepresidenta de la Juventud UDI en 2004. Postuló al Concejo Municipal de Iquique ese mismo año. En 2008 fue secretaria municipal del alcalde de Alto Hospicio Ramón Galleguillos (UDI).

El abogado **Sebastián Prat Panatt** figura en la lista del SII con boletas emitidas para SQM por \$2,5 millones. En 2009 también recibió honorarios de Asipes.

Pamela Cristina Campos Joost también aparece con honorarios pagados por empresas pesqueras. En la denuncia del SII figura con boletas para SQM por \$9,2 millones. Ha recibido pagos de **Asipes** y de **Pesquera El Golfo**. También registra pagos de la Universidad del Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán, la UDI y la Municipalidad de Recoleta, además de Bancard, la sociedad de inversión del ex presidente Piñera. Pamela Campos prestó servicios a la campaña del ex mandatario en 2009 por \$1,6 millón.

EL FACTOR LEAY

Varias de las personas incorporadas en la nueva nómina del SII vinculadas a la UDI tienen como factor común su relación con el ex diputado **Cristián Leay**. Una de ellas es **Trinidad Subercaseaux Alessandri**, esposa de Alejandro Leay Cabrera, hijo del ex parlamentario. Ella emitió boletas para SQM por \$5 millones y está demostrado que fue dinero para campañas políticas de la UDI. Esto fue lo que declaró ante funcionarios del SII sobre quién le pidió que emitiera las boletas:

“No me acuerdo bien quién me solicitó la emisión del documento, lo más seguro es que haya sido por parte de la familia de mi marido Alejandro Leay, que tiene afinidad con el partido UDI, pero no presté ninguna contraprestación a SQM, por lo tanto tampoco realicé ningún servicio, de hecho en esa fecha tenía mi hijo de 20 días de nacimiento. El dinero sí lo recibí mediante un vale vista por \$5 millones y luego se lo entregué a mi suegro, Cristian Leay Morán. No conozco a nadie de la empresa Soquimich S.A.”.

En el círculo de Leay también figura **María Alejandra Bórquez Cousiño**, quien recibió de SQM \$40 millones. Psicóloga titulada en la Universidad Central -especializada en “psicología clínica transpersonal”, tipo reiki y energía de la luz-, también ha recibido honorarios del **Centro de Estudios Nueva Minería** y de **Inversiones Santa Mané**, ambas vinculadas al ex diputado Leay.

Carmen Luz de Castro Blanco recibió \$5 millones de SQM. Trabajó en campañas de Cristián Leay, según información publicada por *El Mostrador*, aunque es más conocida por su rol de mano derecha de **Pablo Zalaquett**. Ya declaró como imputada en el Caso Penta por la investigación sobre financiamiento ilegal de la candidatura a senador del ex alcalde de Santiago. *El Mostrador* indica que ha trabajado, además, en campañas de Pablo Longueira, Francisco de la Maza y Joaquín Lavín.

FAMILIAS LIGADAS A LA UDI Y A SQM

Juan Pablo Aguerreberry Tesler fue incluido en la lista del SII porque facturó \$ **46,2 millones** a SQM que no están debidamente respaldados. Es abogado de la Universidad Andrés Bello y en julio de 2009 creó Azócar, Aguerreberry y Compañía (Demande.cl), empresa que presta asesorías legales. En septiembre del mismo año, Aguerreberry vendió su parte (50%) a su hermana Magda. El dueño de la otra mitad es el marido de su hermana, **Octavio Andrés Azócar Simonet**, quien también aparece en la lista del SII con boletas por \$5 millones a SQM. La esposa de Aguerreberry, **Laura Andrea Toledo Cruz**, también integra la nueva nómina del SII con boletas a SQM por **\$14,8 millones**.

En 2005, Octavio Azócar constituyó dos sociedades. La primera, Asesoría en Gestión Comunicacional, más conocida como Rush, junto al entonces alcalde de Recoleta **Gonzalo Cornejo** (UDI) y a Jenny Acevedo Sepúlveda, su ex jefa de gabinete, involucrada en el cobro de asesorías parlamentarias que luego se depositaban en la cuenta de Cornejo y su esposa, la diputada Claudia Nogueira ([vea el reportaje de CIPER](#)). La segunda fue Full Call, junto a Aníbal Rodríguez Letelier y Cristián Otaegui Cruchaga. Todos ellos vinculados al llamado “Caso GMA”, en que se investigaron triangulaciones y contratos irregulares ligados a campañas políticas en la zona norte de Santiago, y que finalmente fueron sobreseídos.

Azócar prestó servicios a **Asesorías Cristina Zúñiga**, consultora investigada por la Fiscalía por emitir facturas para el financiamiento de la campaña de Pablo Zalaquett ([vea el reportaje de CIPER](#)), y tiene relación societaria con **Víctor Krefft Marín**, a quien también el SII pide investigar como emisor de boletas para SQM por servicios no prestados.

Juan Pablo Aguerreberry fue vicepresidente de la juventud UDI (2001), candidato a diputado (2001) consejero nacional (2004-2008), secretario general por Santiago Poniente (2008-2010) y concejal por Renca (2008-2012). Al menos durante 2012 y 2013 prestó asesorías a la diputada **Karla Rubilar** (ex RN, hoy Amplitud) por un total de **\$13,6 millones**. Además, ha sido su abogado.

Laura Toledo [prestó servicios de “supervisión de call center”](#) durante la campaña de Joaquín Lavín en 2005, [la misma candidatura a la que la empresa de su cuñado, Full Call](#), prestó servicios en ese rubro. Durante ese año también facturó a la campaña de la UDI, según los registros del Servel. Fue además asesora de Rubilar y del **Centro de Estudios Nueva Minería** y de **Inversiones y Asesorías Santa Mané**, ambas vinculadas al ex diputado Cristián Leay (UDI).

Otra familia relacionada a la UDI y a los pagos irregulares de SQM es la de **Víctor Krefft Marín**, quien entregó boletas por **\$4 millones** a la minera de Ponce Lerou. Krefft es un histórico de la UDI. Fue presidente de su Consejo Metropolitano Poniente (hasta al menos 2013) e integró el mítico departamento poblacional de la UDI, formado por **Pablo Longueira** y donde participaron **Roberto Lewin** y **Cristián Leay**.

Según la rendición de gastos de la UDI para la campaña de 2005, Krefft recibió \$1,6 millones por una asesoría de coordinación de las elecciones parlamentarias. Ha recibido rentas de la Cámara y del Senado. También ha trabajado para el ex diputado Gonzalo Uriarte y la sociedad de **Jovino Novoa**, Inversiones y Mandatos (ya involucrada en la investigación a Penta), además de la UDI.

En el Diario Oficial registra sólo una sociedad -Consultores Integrados Limitada-, en la que junto a su esposa **Viviana Pavone Ferrer** es socio del alcalde de Colina **Mario Olavarría** (UDI) y de Miguel Schweitzer Fernández (abogado defensor de Novoa), entre otros.

Viviana Pavone también recibió pagos de SQM por un total de \$10 millones. Fue asesora de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaría General de la Presidencia (entre 2012 y 2014) con un honorario bruto de \$1,3 millón. La página de Transparencia del gobierno la registra con licencia médica durante todo el periodo. De profesión Técnico en Turismo, fue candidata a alcaldesa UDI por Isla de Maipo en 2008, pero su postulación fue rechazada inicialmente por no contar con administrador electoral. Apeló al Tribunal Calificador de Elecciones y la apelación la realizaron Juan Antonio Coloma y el partido, y su apoderado, **Juan Pablo Aguerreberry** (en la foto).

Su hijo, **Francisco Krefft Pavone**, emitió boletas por \$13,5 millones para SQM. En 2011 y 2012 recibió honorarios de la **Corporación de Asuntos Públicos**, entidad que es dueña de la casa vecina a la UDI, donde funcionan las oficinas de los senadores. El reporte de sustentabilidad de SQM de 2010 define a esta corporación como “colaboradora” de la empresa.



GREMIALISTAS POR PIÑERA

En la nómina de querellados por el SII hay otros nombres vinculados a la UDI que además recibieron pagos por trabajar para Piñera. El abogado **Enrique Javier Óscar Gillmore Carmona**, director nacional de la Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián, figura en esa situación. El hijo del brigadier (r) Enrique Gillmore Callejas cobró \$13 millones a SQM. Además, registra honorarios pagados por Inversiones Santa Cecilia, sociedad de Sebastián Piñera. También realizó trabajos para el ex diputado Darío Paya (UDI) y prestó servicios a la campaña a diputada de Remza Delic (UDI) por \$3 millones.

En la nómina de querellados también aparece un estrecho colaborador de la gestión presidencial de Piñera: **Roberto Ignacio Lewin Vial**, hijo de **Roberto Lewin Valdivieso**, militante histórico de la UDI, quien fue jefe de la avanzada presidencial durante toda la gestión de Piñera. No era su primera vez en La Moneda: en *La Tercera* aparece como asesor de Cristián Labbé cuando éste fue secretario General de Gobierno durante el

régimen militar. Integró el departamento poblacional de la UDI y fue consejero regional metropolitano de ese partido. Su hijo -abogado de la Universidad de Los Andes con un master en Duke-, quien asesoró al diputado Cristián Monckeberg (RN) en 2010 y 2011, entregó boletas a SQM por \$11,7 millones por servicios que él mismo reconoció en la indagación nunca prestó a esa empresa. Actualmente trabaja en el estudio Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr.

Otro de los querellados es **Robert Gerhard Araya Alquinta**, ex concejal UDI y ex candidato a alcalde por Antofagasta, quien emitió boletas para SQM por \$14,9 millones. En 2010, según los archivos del Serval, Araya Alquinta fue remunerado por “trabajo en terreno” para la campaña de segunda vuelta de Piñera. Por ese servicio cobró \$548.000. Araya también se desempeñó como encargado distrital de la campaña de Piñera en Antofagasta y tras la victoria de su abanderado fue nombrado director regional de Sercotec.

COMUNICADORES UDI

La ex jefa de prensa de la UDI, **Lily Alejandra Zúñiga Flores**, también está incorporada a la denuncia del SII. La periodista trabajó con **Pablo Zalaquett** y **Pablo Longueira** y en las últimas presidenciales se encargó primero de las comunicaciones de Longueira y luego de las de Evelyn Matthei. Entre 2012 y 2013 asesoró al comité de senadores del partido. En agosto de 2014 fue contratada por el alcalde de Colina, **Mario Olavarría** (UDI), para una asesoría comunicacional. Poco antes se asoció al ex alcalde de Recoleta **Gonzalo Cornejo** (UDI) para crear la empresa Comunicaciones Connectiva. Su nombre en Twitter es @negraudi y su biografía informa que es la dueña de Sumaya Comunicaciones. A SQM le facturó \$6,2 millones.



También periodista, **Augusto Jorge Da Fonseca Dreyer**, recibió \$6 millones de SQM. Fue asesor comunicacional de la Intendencia Metropolitana entre 2010 y 2013. Antes trabajó en la Municipalidad de Providencia, en la agencia Target Comunicaciones -de los periodistas Paula Afani y Jorge Díaz, entre otros-, en el Canal Vía X, en el comando presidencial de Joaquín Lavín, en la agencia de comunicaciones Hill & Knowlton Captiva y en la Academia de Guerra del Ejército.

Socia del emblemático periodista y asesor de la UDI **Manfredo Mayol**, **María del Pilar Guridi Bravo** es militante de ese partido y entregó boletas a SQM por \$5 millones. Con Mayol y Jorge Manzano creó en 2012 la sociedad CG Consultores. Ese mismo año se asoció con Manzano en Inversiones y Asesorías San Paoli. Ha recibido rentas de Mayol y Cía., de la **Corporación de Asuntos Públicos** y de la UDI. Además, en la campaña 2013 aparece cobrando \$8,8 millones como asesora de Evelyn Matthei.

María Paz Schuster Pinto es periodista y psicóloga. Trabaja en el Sernam desde agosto de 2010 como sectorialista de Desarrollo Regional y Coordinación Intersectorial. De SQM recibió \$1 millón y también registra pagos del **Centro de Estudios Nueva Minería**.

La periodista **Karin Renate Grollmus Fritz** es subdirectora de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes. Fue jefa de Comunicaciones del Ministerio de Economía bajo la gestión de **Pablo Longueira** y del Ministerio de Justicia, cuando lo encabezaba **Teodoro**

Ribera. Trabajó en las dos campañas presidenciales de **Joaquín Lavín**, además de desempeñarse en los municipios de Las Condes y Santiago cuando Lavín fue alcalde. Ha recibido pagos de Inmobiliaria Ainavillo -a través de la cual Lavín invertía en la Universidad del Desarrollo- y de la Fundación Chile Justo, creada por Pablo Longueira. De SQM recibió \$3 millones.

La diseñadora gráfica **Francisca Wiegold Herrera** registra \$9 millones en boletas a SQM. En su LinkedIn dice que prestó servicios para la campaña municipal UDI de 2012, pero curiosamente el informe de gastos del Servel sólo arroja que le pagaron \$ 5.499 de la campaña a concejal por Puente Alto de Benjamín Palacios. También ha recibido honorarios de la Fundación Jaime Guzmán.

Pablo José Jansana Soto es periodista y fue asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en 2011 y de la Subsecretaría de Prevención del Delito el mismo año. Fue candidato a concejal por Pedro Aguirre Cerda en 2012. Entre 2013 y 2014 asesoró a la Subsecretaría de Obras Públicas. Ha recibido pagos de la Universidad del Desarrollo y de Azerta, la agencia de comunicaciones y lobby de Cristina Bitar. De SQM recibió un pago de \$ 4 millones.

PROFESIONALES LIGADOS A LA UDI

En la larga lista de personas que recibieron pagos bajo investigación de SQM y que están vinculados a la UDI, figuran otras 23 personas:

Recibiendo paralelamente rentas de la UDI y pagos de honorarios de SQM, aparecen **Juan Carlos Montecino Tejo** y **Viviana Elizabeth Mora Godoy**. El primero recibió \$36,8 millones de la empresa de Ponce Lerou y en 2010 también realizó trabajo en terreno para la candidatura de Sebastián Piñera, labor por la que cobró \$3,2 millones. Viviana Mora, en tanto, emitió boletas para SQM por \$33 millones.

Boris Alejandro Rocha Medina registra honorarios pagados por la UDI y por la **Corporación de Asuntos Públicos**. Para SQM emitió boletas por \$9 millones. En 2012 trabajó para el candidato a alcalde de la UDI por Pedro Aguirre Cerda, Rafael Izquierdo. Ese mismo año también recibió honorarios de la Subsecretaría del Interior, donde coordinó actividades territoriales con el gabinete del subsecretario Rodrigo Ubilla.

Esteban Emilio Gal Oliva recibió \$3,5 millones de SQM. En su perfil de LinkedIn dice que es el gerente general de CIS Chile (Centro de Investigaciones Sociales), que tiene a **Gonzalo Müller**, dirigente de la UDI y esposo de la diputada María José Hoffman, como uno de sus fundadores. Junto al ex diputado Darío Paya, Müller creó Benchmark, la principal encuestadora del partido.

Marcelo Alfredo Rivera Olave en su cuenta de Twitter se define como “gremialista y UDI”. Estudió Derecho en la Universidad Andrés Bello, se declara experto en debate y es profesor universitario, pero cuando en 2012 trabajó en el Ministerio de Educación como asesor estudiantil aún figuraba sin título universitario. También registra honorarios de la UDI y de la Fundación Jaime Guzmán. A SQM le entregó boletas por \$7 millones.

Manuel Óscar Rodríguez Campillay es abogado y fue notario suplente de la Primera Notaría de Arica. En noviembre de 2010, Sebastián Piñera lo nombró integrante de la junta directiva de la Universidad de Tarapacá. Fue candidato a concejal por RN en Arica en 1992 y en 2014 corrió por la UDI para el consejo regional. Entregó boletas a SQM por \$25,5 millones.

Tatiana Araceli Aránguiz Palacios, según la información que publica en Facebook, estudió Técnico en Enfermería en el AIEP. Sus boletas para SQM suman \$16,8 millones y también figura con rentas de bajo monto pagadas por la UDI y la Fundación Jaime Guzmán.

Catlin Valeska Sepúlveda Beltrán en 2013 trabajó en la campaña para consejeros regionales de la UDI y cobró \$ 2,2 millones. Emitió boletas para SQM por \$15 millones y en los últimos años ha recibido honorarios de la UDI y de la **Corporación de Asuntos Públicos**.

Gabriel Esteban Jiménez Celsi es abogado de la Universidad del Desarrollo. En el gobierno de Piñera trabajó en la Subsecretaría de Economía, como asesor legislativo del subsecretario **Tomás Flores**. Entregó una boleta a SQM por \$5 millones.

Carolina Undurraga Sattler es ingeniera civil industrial de la Universidad Diego Portales. Trabaja en Icondesign, empresa que se presenta como “partner” de Triangular, la consultora de comunicaciones estratégicas de Pablo Zalaquett. Sus boletas a SQM alcanzan los \$5 millones.

Daniela Victoria Cabrera Rojas es diseñadora y trabaja en la Onemi desde 2010. SQM le canceló honorarios por \$5 millones y anteriormente también recibió pagos de la UDI.

Gustavo Mauricio y **Nicolás Orlando Guíñez Ramírez** son mellizos, abogados y ambos emitieron boletas para SQM. Nicolás recibió \$10 millones y Gustavo, la mitad de ese monto. Además, han recibido pagos del **Centro de Estudios Nueva Minería**.

Maximiliano Rafael Bellolio Gutierrez estudia Periodismo en la Universidad de Los Andes y es primo del diputado Jaime Bellolio (UDI). Sus boletas a SQM suman \$3 millones.

Gustavo Adolfo y **Alejandro Wolfgang Urrea Lorca** son hermanos y emitieron ambos boletas para SQM: Gustavo por \$ 5 millones y Alejandro, por \$ 4,3 millones. Este último, egresado de Derecho de la Universidad Católica y licenciado en Historia y Geografía, es encargado de la Unidad de Control de la Asociación de Municipalidades de Chile, que reúne a los alcaldes de derecha escindidos de la Asociación Chilena de Municipalidades. Ha sido, además, asesor de la Municipalidad de Colina, cuyo alcalde es **Mario Olavarría** (UDI).

Sebastián Ignacio Gallardo Céspedes es estudiante de Ciencia Política en la Universidad Gabriela Mistral. En las elecciones de 2013 recibió pagos de las campañas de Evelyn Matthei, Patricio Melero y Roberto Lewin, que sumaron poco más de \$12 millones.



También ha recibido honorarios de la Fundación Jaime Guzmán y de SQM recibió \$5 millones.

Sofía Daniela Jaña Cabezas es secretaria ejecutiva de la Juventud UDI y coordinadora del programa Mujeres en la Cancha. Egresó de Fonoaudiología en diciembre de 2014. Ha recibido honorarios de la UDI y sus boletas a SQM suman \$5 millones.

Andrés Antonio Fuentes Echevarría fue candidato a concejal por Lo Prado en 2008 como independiente dentro de la lista de derecha. Ha recibido pagos de la Fundación Jaime Guzmán. En la nómina del SII aparece con pagos de SQM por \$5 millones.

Paula Fernanda Labra Quezada es hija de **Rosa Quezada Canales**, quien dice ser recepcionista de la sede de la UDI en su perfil de LinkedIn. Paula Labra recibió honorarios de la Universidad del Desarrollo entre 2000 y 2002. Las boletas a SQM que le cuestiona el SII suman \$6 millones.

Silvana Lorena Vega Pinto es asesora de los diputados de la UDI José Antonio Kast y Felipe Ward. Antes trabajó a honorarios para el ex diputado Mario Escobar (UDI), condenado por fraude al Fisco. De SQM recibió \$2 millones.

Karen Fabiola Villarroel Gallo es abogada y recibió \$5 millones de SQM. También registra pagos de Genesis Partners, la empresa de la que era socio el ex subsecretario Pablo Wagner, hoy en prisión preventiva por la investigación a Penta.

Tolosa y Compañía Limitada es una sociedad creada por **Víctor Hugo Tolosa Zapata** y **Pablo Antonio Tolosa Fernández**. La empresa facturó \$2,5 millones a SQM. Pablo Tolosa milita en la UDI y fue gobernador y luego intendente de Antofagasta en el gobierno de Piñera. Víctor Hugo Tolosa, en tanto, fue funcionario del Servicio Electoral al menos entre 2006 y 2013.

María Francisca Orellana Lazo emitió boletas para SQM por \$4 millones y ha recibido pagos del Centro de Estudios Nueva Minería.

LOS NOMBRES DE RENOVACIÓN NACIONAL

En la nueva denuncia de Impuestos Internos figuran 15 personas que CIPER identificó como relacionadas con Renovación Nacional (RN), las que recibieron de SQM un total de \$337,5 millones ([vea la nómina](#)). El monto más alto lo percibió **Claudio Eguiluz Rodríguez**, uno de los principales “caciques” de RN en la Región del Biobío, actual consejero regional y ex vicepresidente nacional de ese partido. Las boletas para Eguiluz pagadas por la empresa de Julio Ponce Lerou suman **\$112,5 millones** ([vea el artículo de CIPER “La onda expansiva del caso SQM alcanza a Renovación Nacional en la Región del Biobío”](#)).

Eguiluz ha señalado que hizo asesorías en los últimos tres años para SQM, pero no ha detallado en qué consistieron esos trabajos. Pero si ahora su nombre está en la nómina del

SII, es porque en los libros de la minera de Ponce Lerou no hay comprobantes que acrediten su trabajo.



De los 15 contribuyentes vinculados a RN bajo la mira del SII, cinco forman parte del círculo cercano a **Gustavo Alessandri Balmaceda**, ex diputado de ese partido derrotado en las elecciones de 2009. El ex parlamentario recibió pagos de SQM por \$10 millones.

Las personas investigadas relacionadas con Alessandri son: su hijo **Gustavo Alessandri Bascuñán (en la foto)**, actual concejal UDI por Puente Alto (emitió boletas para SQM por \$23 millones); su hija **Antonia Alessandri Bascuñán** (recibió \$17 millones de SQM y también hizo asesorías para el ex diputado **Cristián Leay**); **Ana Carolina Palacios Silva**, hija del coronel (r) del Ejército Mauricio Palacios Amigo y tiene nexos familiares con una socia del ex diputado Alessandri (recibió \$45 millones de SQM); su hermano, **Mauricio Sebastián Palacios Silva** (quien recibió \$5,9 millones), y **Nicole Etcheberry Spadaro**, periodista que trabajó en la campaña de Alessandri y que bajo la administración del presidente Sebastián Piñera fue contratada por la Secretaría General de Gobierno (entregó boletas a SQM por \$3 millones).

Entre las personas vinculadas a RN que figuran en la nueva denuncia del SII también está el abogado **Carlos Eugenio Castro Castro**, quien recibió \$31 millones de SQM. Trabajó en el estudio jurídico PDD & Cía., del ex intendente de Santiago Juan Antonio Peribonio, y hoy en el bufete De la Maza y Cía., en cuya página web se lo presenta como ex abogado del Ministerio del Interior.

En la lista también está el contador auditor **René Ludwing Hormazábal Farías**, quien emitió boletas a SQM por \$17 millones. Hormazábal también ha recibido rentas del Instituto Libertad, entidad vinculada a RN, y fue funcionario a contrata del Ministerio del Interior hasta diciembre pasado, con un honorario de \$2 millones.

María José Rufin Velasco entregó boletas a SQM por \$13,3 millones y también aparece recibiendo pagos de Renovación Nacional en 2009. Casada con Andrés Silva Troncoso, abogado y socio del bufete Larraín y Asociados, fundado por **Carlos Larraín Peña**, ex presidente de RN y ex senador por la Región de los Ríos.

Patricio Marcelo Lazcano Silva recibió pagos de SQM por \$11 millones. Lazcano fue concejal por San Joaquín, en representación de RN (2004-2012). En 1999 fue jefe de gabinete del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat (RN), y luego su director jurídico hasta 2005. Después fue, sucesivamente, director de Desarrollo Comunitario, director Jurídico y administrador municipal de la comuna de La Florida bajo la alcaldía de Pablo Zalaquett (UDI). En 2008, cuando Zalaquett asumió la alcaldía de Santiago, se llevó a Lazcano con él, y lo nombró director jurídico de la municipalidad. Ahora es director jurídico de Lo Barnechea, bajo la gestión del alcalde Felipe Guevara (RN).

Lazcano facturó para SQM, pero no hizo trabajos para la minera, sino para la **Fundación Chile Justo**, según él mismo lo reconoció en la indagación: *“Entregué un informe sobre las sociedades de inversión pasiva, el cual fue pagado en las dos boletas de honorarios*

*señaladas. Los servicios los presté el año 2009 y la generación del informe tomó un tiempo aproximado de tres meses. Los servicios los realicé en mi casa. El informe se lo entregué a la Fundación, a la directora ejecutiva (Titi). No recuerdo haber recibido el dinero... Fue la **Fundación Chile Justo** quien me solicitó que las boletas de honorarios las emitiera a nombre de SQM, pero el servicio sí lo realice”.*

En la nómina también aparece **Karole Patricia Aliaga Rodríguez**, quien registra boletas para SQM por \$10 millones y que en el Servel figura en la planilla de gastos declarada por RN para la elección municipal de 2004, cobrando \$5,5 millones por una asesoría para la campaña de concejales.

Cristóbal Urruticoechea Ríos emitió una boleta para SQM por \$900 mil. Ex concejal y ex candidato a alcalde por Los Ángeles, en 2013 Urruticoechea fue candidato a diputado de RN por esa misma circunscripción y aunque obtuvo la segunda mayoría, fue desplazado por el sistema binominal. Ese mismo año figura recibiendo honorarios de Inmobiliaria Lo Fontecilla, propiedad del ex presidente de RN, Carlos Larraín.

Daniel Esteban Gutiérrez Fariña entregó boletas a SQM por \$18 millones. En un reportaje publicado por CIPER el 24 de marzo pasado se estableció que forma parte del círculo cercano al consejero regional del Biobío Claudio Eguiluz (RN). Desde marzo de 2012 a diciembre de 2014 Gutiérrez trabajó como coordinador en la Región del Biobío de la División de Organizaciones Sociales (DOS) de la Secretaría General de Gobierno. Reconoció haber trabajado durante 2014 para SQM en una asesoría informática, de la que no entregó detalles, y negó que dicha situación se relacione con financiamiento político operado por Eguiluz.

La nómina de contribuyentes investigados por el SII y vinculados a RN la cierra el abogado **Alejandro Octavio Alegría Tapia**, quien recibió pagos de SQM por \$4,8 millones. En 2012 prestó servicios a la entonces diputada de ese partido, Karla Rubilar, hoy militante de Amplitud. En octubre de 2013 el abogado Alegría Tapia fue imputado por el Ministerio Público en una causa contra una banda que desvalijaba cajeros automáticos, pues se le acusó de haber aceptado que los delincuentes le pagaran con especies robadas (relojes de lujo) o dinero en efectivo producto de los atracos ([vea la información publicada por La Tercera sobre ese proceso](#)).



II.2.- ENCARGADO DE LA AGENDA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO ES INVESTIGADO POR PAGOS DE SQM. CIPER

SII identificó a 172 contribuyentes que recibieron un total de \$4.340 millones de SQM por trabajos sin respaldo y que son investigados por la Fiscalía. Parte del dinero pudo haber sido usado para el financiamiento ilegal de la política. CIPER rastreó los nombres y detectó sus nexos con partidos. Allí aparecen 74 personas vinculadas a la derecha y 11 al oficialismo, entre ellos el abogado Juan Marco Moreno, hombre clave de la agenda legislativa del gobierno desde la Segpres. Además hay siete

personas vinculadas al PRI. Grupo cercano a Ponce Lerou también recibió pagos millonarios.

La arista Soquimich, abierta por la investigación de los ilícitos tributarios cometidos por los dueños del Grupo Penta, terminó siendo un misil que esparció esquivas en la derecha y la Nueva Mayoría. La ampliación de la denuncia criminal que hizo este jueves 2 de abril Impuestos Internos (SII), en la que se pide investigar a 172 contribuyentes, involucra a altos dirigentes oficialistas y opositores, sus familiares y colaboradores. Todos quedaron bajo la sospecha de haber recibido dineros de la empresa que controla Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, emitiendo boletas por trabajos que no se realizaron.

El monto que involucra el nuevo paquete de 846 boletas y facturas que podrían haber financiado ilegalmente a políticos, suma más de **\$4.340 millones** (US\$6,9 millones). Tan solo una parte de los US\$11 millones reconocidos por el propio gerente general de SQM, Patricio de Solminihaq, como el universo total de los pagos irregulares efectuados por la minera durante seis años.



Las cifras hablan por sí solas de la magnitud de la cooptación de la política por la empresa privada. Porque la nueva denuncia del SII abrió otras líneas de investigación a empresas que usaron el mismo procedimiento para influir en la dictación de leyes y la toma de decisiones que las favorecieran. Una de las aristas que emerge es el sector pesquero. En la nueva nómina del SII aparecen personas que ya han reconocido en la indagación haber facturado a empresas pesqueras a petición de una estrecha colaboradora de Pablo Longueira, quien como ministro de Economía fue el encargado de negociar y promulgar la controvertida Ley de Pesca

El control que tienen las empresas sobre las leyes que se tramitan en el Congreso, implica financiar a todos los sectores. Así lo evidencia la nueva denuncia de Impuestos Internos que incorpora a la lista de los investigados por recibir pagos de SQM a un hombre clave en el manejo de la agenda legislativa de La Moneda: el abogado **Juan Marco Moreno Rosales (PPD)** –en la foto-, funcionario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Moreno es, además, presidente del Tribunal Supremo del PPD y operó como “enlace territorial” de la última campaña de Michelle Bachelet.

En la nómina del SII, después del rastreo realizado por CIPER de sus vinculaciones políticas y familiares, figuran siete personas ligadas a la **Democracia Cristiana**, las que suman un monto de \$171,6 millones pagados por SQM ([vea la nómina](#)). Otras tres son militantes del PPD, con facturas por \$35 millones. También aparecen 12 personas vinculadas al Partido Regionalista Independiente (PRI), con pagos de SQM por \$329 millones ([vea la nómina](#)).

La mayor cantidad de facturas cuestionadas involucra a la UDI, con 59 contribuyentes bajo investigación, por facturas que superan los \$536 millones, además de los dineros que recibieron corporaciones ligadas al gremialismo y que también son investigadas. En la ampliación de la denuncia criminal del SII, CIPER detectó otras 15 personas relacionadas a Renovación Nacional, recibiendo pagos de SQM por \$316,5 millones.

LAS CONFESIONES

La importancia que reviste esta ampliación de la denuncia del SII y que ahora deberá investigar el Ministerio Público, es que la base probatoria en que se sustenta la acción judicial fue proporcionada

por el principal acusado: la plana ejecutiva de Soquimich. A ello se agrega que algunos de los que integran la nómina de los investigados, ya han reconocido haber emitido facturas por trabajos no realizados a petición de destacados dirigentes políticos de un amplio espectro.

Fue el 25 de marzo que el actual gerente general de Soquimich, Patricio de Solminihac Tampier, entregó el primer reconocimiento de los ilícitos cometidos al responder por oficio a la Superintendencia de Valores y Seguros:

“La Sociedad ha individualizado boletas y facturas que fueron emitidas por terceros y pagadas por SQM durante los seis años que comprende el período tributario 2009-2014 y cuyos pagos podrían ser cuestionados por Impuestos Internos por no contar con respaldos adecuados para ser calificados como necesarios para generar la renta. El valor acumulado de todas dichas boletas y facturas para tales seis años asciende a aproximadamente US\$11 millones”.



En el mismo oficio, el gerente de SQM reconoció que la falta de justificación para estos millonarios pagos detonaron la salida de su antecesor y hombre de confianza histórico de Julio Ponce Lerou: Patricio Contesse, quien habría guardado silencio al ser llamado a declarar “para no autoincriminarse”.

Ese mismo día el gerente general de SQM asumió el mismo monto de pagos sin respaldo (US\$11 millones), ante analistas internacionales. No fue un arrebato de sinceridad. A estas alturas en SQM saben que no sólo la legislación chilena les caerá encima, sino también la internacional, al ser una de las mayores empresas nacionales que opera en los mercados externos donde las reglas sobre sobornos y pagos ilegales a políticos acarrear sanciones son

De hecho, en la nueva denuncia criminal de Impuestos Internos se incluye una nómina de 28 personas que CIPER identificó sin relación a pagos a políticos, pero sí vinculados a uno de los hombres de mayor confianza del controlador de la minera, Julio Ponce Lerou: el abogado **Roberto Guzmán Lyon** (en la foto) ex presidente de Oro Blanco e involucrado en el “Caso Cascada”, está siendo investigado por su participación en el mecanismo que se usó en la minera para ocultar ganancias y derivarlas sin pagar impuestos. Las personas relacionadas con Guzmán recibieron pagos por \$584,5 millones de SQM. De allí que el impacto que recibió este jueves la minera fue muy duro. Porque la ampliación de la denuncia criminal tiene un principal acusado: los directivos de Soquimich. Será el Ministerio Público quien deberá ahora investigar a cada uno de los contribuyentes que el SII identificó como receptores de los pagos sin respaldo reconocidos por la propia gerencia de la minera. Y serán ellos los que deberán demostrar que la contabilidad de SQM se equivoca y que efectivamente realizaron trabajos. El desfile de políticos recién comienza.

SOQUIMICH EN LA MONEDA

En la nómina de los nuevos investigados por el SII por boletas sin justificación de servicios prestados a Soquimich, aparecen dos abogados que llevan directamente al PPD y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres): **Juan Marco Moreno Rosales** (con pagos por **\$15 millones**) y **Luis Andrés Carracedo Aguayo** (boletas por **\$5 millones**). Ambos están relacionados a la consultora **Altercom Asociados**, la que también figura en la nómina de los nuevos investigados por el SII, recibiendo pagos de SQM por **\$10 millones**. Su accionista principal es el mismo abogado Juan Marco Moreno Rosales, actual presidente del Tribunal Supremo del PPD.

El abogado **Luis Carracedo Aguayo** también participó en la propiedad de Altercom (hasta julio de 2012, período investigado), y registra una sociedad con el abogado **Oscar Aitken Lavanchy**, quien fuera albacea, asesor tributario de Pinochet y constituyó varias de las cuentas en paraísos fiscales en las que el ex dictador recibió comisiones por la compra y venta de armas.



Juan Marco Moreno (Fuente: angelino.cl)

Juan Marco Moreno trabajó en la última campaña de Michelle Bachelet como “enlace territorial”, y hoy se desempeña en la Segpres, uno de los principales ministerios políticos de La Moneda, desde el inicio del gobierno (marzo de 2014), en su División de Relaciones Políticas e Institucionales, con un remuneración mensual de \$3,5 millones. En su perfil en LinkedIn dice que su función es *“planificar, coordinar y seguimiento a la estrategia de monitoreo parlamentario de manera de cumplir con la agenda legislativa gubernamental, identificando la ruta crítica en la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso Nacional”*. Allí también se califica como un *“asesor senior experto legislativo en materias políticas e institucionales entre gobierno y parlamento”*.

El abogado y presidente del tribunal Supremo del PPD recibió remuneraciones de ese partido en los años 2004 y 2005 y registra pagos en 2006 de una de las sociedades de **Enrique Correa Ríos**, dueño de una de las principales empresas de lobby y comunicación estratégica del país (Imaginación). Además, Moreno fue asesor jurídico de tres municipalidades controladas por el PPD: **Hualpén** (enero 2013-marzo 2014), con la alcaldesa Fabiola Lagos; **Lo Prado** (agosto 2012-noviembre 2012), con el alcalde Gonzalo Navarrete, y **Vichuquén** (marzo 2012-marzo 2014), con el alcalde Román Pavez. También fue director jurídico de la **Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia** (mayo 2006-febrero 2008), y de la Gobernación Provincial del Maipo (julio 2009-julio 2010), ambas controladas entonces por el PPD. Moreno es además socio del estudio jurídico **Rabah, Chaer Mohor & Asociados** desde enero de 2010, especializado en temas corporativos, tributarios y regulatorios del sector eléctrico y telecomunicaciones.

En la página web de Altercom, el actual responsable de seguimiento de leyes del gobierno en el Congreso, aparece como *“asesor en diversas materias reguladas por la ley eléctrica, tanto a clientes nacionales como extranjeros, asesorías en instrumentos de inversión extranjera tales como DL 600 o capítulo XIV del compendio de normas del Banco Central, Inmobiliarias y empresas constructoras, así como también en ámbito de la Radiodifusión Sonora y de sus normativas, evaluando nuevas tecnologías digitales para radio y televisión abiertas (broadcasting). Realiza asesorías para la Subsecretaría de Telecomunicaciones en la reestructuración del espectro radioeléctrico”*.

También se califica como un “*experto en Justicia Electoral asesorando organizaciones intermedias tales como sindicatos, centros de padres y organizaciones políticas en materia contenciosa electoral*”.

EL REGISTRO DE ALTERCOM

Cinco fueron los socios que crearon **Altercom** en febrero de 1998 (nombre original: “Báez, Jara, Avaria, Pereira & Moreno y Compañía Limitada”), con **Juan Marco Moreno Rosales** y **José Eduardo Báez Faúndez** a la cabeza. Meses después quedarían como únicos dueños Moreno Rosales y un nuevo socio: **Luis Andrés Carracedo Aguayo**. En julio de 2012, Carracedo le vendió su parte a **Alex Fabián Moreno Garay**, y fue entonces que Juan Marco Moreno Rosales se convirtió en el accionista principal con un 99,5% de la propiedad.

El abogado **Luis Andrés Carracedo Aguayo** dejó en 2012 la consultora Altercom e integra además como persona natural la lista de los nuevos querrelados por Impuestos Internos en la arista de las boletas sin respaldo efectivo de servicios prestados a Soquimich (por \$5 millones). Carracedo es socio del ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken Lavanchy y del ingeniero Fermín Vásquez De Pablo, en una sociedad de explotación agrícola y generación y distribución de energía eléctrica (“Compañía de Producción y Comercio San Pablo”).

Aitken ocupó un alto cargo en Famae y creó varias sociedades en paraísos fiscales tanto para Pinochet como para sus finanzas personales, todas investigadas por la justicia en Chile y en Estados Unidos por las comisiones de venta de armas que por ellas transitaron. Entre ellas, las más importantes son **Tasker Investment** y “**Eastview Finance**”, en la que confluyeron otras tres empresas: **Cornwall Overseas Corp.**, controlada por el mismo Aitken; **Berthier Investment Inc.**, controlada por Karel Honzik, el principal intermediario de armas de Pinochet; y por **Legó Corp.**, de propiedad del que fuera director de Fame, general (r) Guillermo Letelier Skinner.

Entre los clientes que la consultora Altercom anuncia en su página web, figuran: Entel, Novojet, Corona, Inter Export Telecomunicaciones (entre julio de 2013 y octubre 2014 obtuvo cuatro contratos con Carabineros y uno con la Onemi por \$48.828 millones en total), Andes Lift Elevadores, Comercial Ecuador Limitada, PIT Telecom y **Soquimich**.

Será la investigación judicial y la de Impuestos Internos la que dilucidará qué asesorías le hizo efectivamente Altercom a la empresa de propiedad de Julio Ponce Lerou y cuáles no tienen respaldo. Lo mismo ocurrirá con las boletas y facturas de los abogados Moreno Rosales y Luis Carracedo Aguayo.

Del PPD hay otro funcionario de gobierno incluido en la nómina de la denuncia del SII: Rodrigo Francisco Álvarez Seguel, actual director nacional del Sernageomin, aparece emitiendo facturas para la minera controlada por Ponce Lerou por \$5 millones.

SIETE DC BAJO SOSPECHA

Seis personas vinculadas a la Democracia Cristiana integran la nómina de investigados por el SII en esta nueva camada de pagos irregulares de Soquimich. En total, todos ellos recibieron pagos de SQM por \$171,6 millones. De ellos, el que figura con el monto más alto es **Roberto Javier León Araya**, hijo del diputado Roberto León Ramírez (DC). Las boletas que entregó a la minera suman **\$123,7 millones**.

El diputado León (en la foto) ha dicho que su hijo es ingeniero agrónomo y que efectivamente hizo asesorías para SQM, aunque hasta ahora no ha entregado detalles de esos trabajos. El parlamentario ha sido cuestionado por su rol en la investigación que hizo la Cámara de Diputados a los ilícitos de SQM en Cascadas. Allí fustigó duramente al presidente de la comisión indagatoria, Nicolás Monckeberg (RN), pues a su juicio no se abordaba la eventual conexión del ex presidente Sebastián Piñera con los hechos pesquisados. La posición de León, tendiente a involucrar a Piñera, estaba en total sintonía con la defensa del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou.

El segundo monto más alto pagado por SQM a una persona con nexos en la DC, corresponde a **Jazmín Cecilia Pavez Borbaran: \$25 millones**. Ella aparece como militante del partido, habilitada para votar en las recientes elecciones internas, en la nómina que se puede consultar en la web de la DC. Entre sus antecedentes laborales figura que trabajó en 1998 con el ex intendente de Valparaíso, Iván de la Maza (DC). Además, está inscrita en el Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación, dependiente de Sence, como representante legal de la OTEC Mypes Capacitación Limitada, cuyo socio principal es el también militante DC Alejandro Bascañán Espinoza.

En el tercer peldaño de los honorarios más altos pagados por SQM a contribuyentes relacionados con la DC, figura **Jaime Rafael Ricardo Araya Guerrero**, miembro del concejo municipal de Antofagasta y hermano del senador por la Segunda Región, Pedro Araya. En la denuncia del SII aparece emitiendo boletas para SQM por un monto total de **\$12 millones**. Aunque fue electo concejal como independiente, pertenece a una familia de tradición DC: su padre fue dirigente, diputado y alcalde de Antofagasta representando a ese partido. Su hermano Pedro fue diputado por esa zona en representación de la DC entre 2002 y 2010, en 2009 renunció y se reeligió como diputado en un cupo del PRI, pero en 2013 ganó la elección a senador como independiente apoyado



nuevamente por la DC.

Juan Pablo Destuet González emitió boletas para SQM por **\$6,5 millones**. Su perfil de LinkedIn indica que entre 2011 y 2014 fue jefe de gabinete de la Dirección de Obras Portuarias del MOP. Antes, entre 2009 y 2010, trabajó como procurador en la oficina de abogados de Jaime Pilowsky (DC), actual diputado por Peñalolén. En el mismo bufete del parlamentario -Cisternas, Concha y Pilowsky Abogados- se desempeña **Gonzalo Javier Infante Urrejola**, quien entregó boletas a SQM por un total de **\$4 millones**.



Sonia Elizabeth Jaramillo Villar es la última de la nómina de querellados por el SII con vínculos con la DC. Ella emitió una boleta para SQM por **\$350 mil**. Sonia Jaramillo es diseñadora gráfica y en el portal de transparencia de la Municipalidad de Maipú registra un contrato a honorarios durante 2012, bajo la alcaldía del actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC). Por la “implementación de soporte a la Dirección Alcaldía” cerró el año con una remuneración bruta de \$1,5 millón mensual. En 2013, ya durante la gestión del actual jefe comunal Cristián Vittori (DC), se le contrató por todo el año con una remuneración de \$1,7 millón, bajo dependencia directa del alcalde. En 2014 sus honorarios aumentaron a \$2 millones y para este año está contratada con una remuneración de \$2,3 millones por mes.

La nueva lista del SII también incluye a un hijo del senador **Jorge Pizarro**, actual presidente de la DC. Sebastián Pizarro Cristi es el representante legal de la empresa Ventus Consulting, la que emitió 11 facturas a SQM por un total de \$45 millones.

LAS BOLETAS DEL PRI



Miguel Adolfo Zaldívar Larraín militaba en la Democracia Cristiana cuando fue electo senador en 1993. Cuando dejó el Congreso en 2009, su partido era otro. En 2007, tras 40 años de militancia y de haber sido su presidente por tres años, fue expulsado de la DC, acusado de “construir un pacto político con la Alianza”. Su fama de “díscolo” se convirtió en rebeldía al votar a contracorriente del oficialismo en la asignación de más recursos para el

Transantiago. Su siguiente paso fue sumarse al Partido Regionalista Independiente (PRI), creado en 2006. Tras salir del Senado, el entonces presidente Sebastián Piñera lo designó embajador de Chile en Buenos Aires. Fue en esa ciudad que falleció, en febrero de 2013, producto de un cáncer al páncreas.

En los registros que SQM entregó al SII y que fundamentan la querrela por la emisión de boletas sin que haya sustento de servicios prestados, y que ahora la justicia investiga en la arista del financiamiento ilegal de campañas políticas, Zaldívar figura recibiendo pagos por \$20 millones. Junto a quien fuera la figura principal del PRI, en la lista del SII aparecen querrellados otros 11 dirigentes y personas vinculadas a ese partido, recibiendo todos un total de **\$329 millones** de Soquimich.

Humberto De la Maza Maillet fue electo en 2013 para presidir el PRI. Siete años antes había fracasado en su intento de llegar a la Cámara de Diputados, como candidato de la Democracia Cristiana por el Distrito N° 12. Durante los años siguientes, entre 2006 y 2009, trabajó como asesor experto en Recursos Humanos en el Servicio Nacional de Aduanas. Registra remuneraciones de la agencia de Aduanas de Juan Sanhueza y Alex Avsolomovichy, entre 2003 y 2006, honorarios cancelados por el fallecido ex senador Adolfo Zaldívar. Emitió boletas a SQM por un total de **\$45 millones**.

El secretario general del PRI, el abogado **Eduardo Edmundo Salas Cerda (en la foto)**, aparece entregando boletas a SQM por un total de **\$73 millones**. Fue candidato a diputado por el Distrito N° 9 en las elecciones parlamentarias de 2009, pero no fue electo. Entre junio de 2010 y marzo de 2014, Salas fue asesor de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En 2012 asumió como administrador de la campaña de Juan Pablo Covili Neira para concejal de Lumaco. Como Salas no entregó las cuentas de ingresos y egresos de esa candidatura, el Servel lo multó con 10 UTM. Este año, Salas ha sido parte activa de las gestiones que ha realizado su partido junto a Evópoli para crear una nueva coalición política.

Salas justificó los pagos de SQM afirmando que hizo de un estudio “sobre la realidad Aymara y las políticas públicas en Arica, Parinacota y Tarapacá” para la minera, que le fue pedido en marzo de 2010 por Adolfo Zaldívar, informe por el que recibió \$39 millones. Además, señaló que entre abril y noviembre de 2011, hizo también informes para SQM “sobre la aplicación de la Norma ISO 26000 (responsabilidad social de la empresa) y otros, cuyos pagos gestionaba la oficina de Adolfo Zaldívar. Nunca conoció a nadie de Soquimich y los informes se los entregó siempre a Zaldívar.

Jorge Osvaldo Brito Gajardo fue en 2009 candidato a diputado por el Distrito N° 42, en la lista del PRI, aunque en una carta aclaratoria que envió al *Diario de Atacama* a comienzos de marzo, aseguró no ser militante del PRI ni miembro del Consejo Regional del Biobío, como lo aseguró un reportaje publicado en ese medio. Hoy figura como asesor jurídico de la Municipalidad de Tierra Amarilla, en manos de Osvaldo Delgado, militante del PRO (partido de Marco Enriquez Ominami). En total, Brito emitió boletas por **\$40 millones** a la minera.



Su hermano, el abogado **Cristian Daniel Brito Gajardo**, también aparece entre los querellados en la nómina del SII. En 2009, fue el administrador general electoral del PRI, y en virtud de ese rol el Servel le formuló cargos por no haber presentado a tiempo los informes de ingresos y gastos de la campaña a diputado del candidato del PRI, Alex Andrade Veli (Distrito N° 60). Fue también asesor parlamentario del senador Adolfo Zaldívar. Las boletas que emitió a SQM suman **\$20 millones**.

La ingeniera agrónoma **Leticia Angélica Olavarría Cárcamo**, también figura entre las personas que emitieron boletas a SQM sin justificación válida de los trabajos realizados. La empresa minera le pagó **\$36 millones**. Olavarría forma parte de la camada de militantes DC que emigraron en 2008 junto a Adolfo Zaldívar y otros parlamentarios al PRI. Actualmente es consejera general de ese partido. En 2002, cuando Ricardo Lagos era presidente, fue designada seremi de Agricultura en la Región de Valparaíso, donde estuvo cuatro años. Tras su salida, asumió como gobernadora provincial de San Felipe. Entre junio de 2011 y junio de 2014 se desempeñó como asesora internacional del Gobierno Regional de Valparaíso. En las elecciones de 2013, fue candidata del PRI a la Cámara de Diputados (Distrito N° 10).

En los estatutos del PRI, **María Fernanda Correa Lasa** es identificada como secretaria y ministro de fe. Ella emitió boletas a SQM por **\$30 millones**. En 2013 recibió honorarios de un partido político y una empresa: el PRI y Celulosa Arauco.

Su hermana, **Carola Mónica Correa Lasa**, es otro de los nombres que figuran en la nómina del SII. Registra actividades por servicios de banquetería desde 1997. Las boletas que emitió a SQM suman **\$15 millones**.

Patricio Sergio Purcell Avendaño también es sindicado por el SII como una de las personas que aparecen con pagos bajo sospecha de SQM por un total de **\$15 millones**. Se dedica a la inversión y renta de capitales mobiliarios y es accionista minoritario en CTI S.A. e Inmobiliaria Viña del Mar. Es hijo del agente de aduanas Patricio Purcell Echeverría, aunque no trabaja en su agencia, sino que en otra de la competencia: es jefe de oficina en la agencia de Sanhueza y Avsolomovich, la misma que registra pagos al presidente del PRI, Humberto de la Maza.

Purcell dijo en la indagatoria que a través de Adolfo Zaldívar se enteró que SQM necesitaba una Agencia de Aduanas, y asegura que hizo toda la presentación entre septiembre y noviembre de 2012, trabajo por el que cobró \$15 millones. Y agregó: *“De Soquimich no conozco a nadie, todo mi contacto fue a través de don Adolfo Zaldívar, a quien le entregué mi propuesta en sobre cerrado. No hubo contrato de por medio, nunca tuve contacto con nadie de Soquimich y me extrañó que nadie me llamara nunca para consultarme nada más...El mismo trabajo hice para **Copec y para Celulosa Arauco**, también por contacto de Adolfo Zaldívar, es decir que no había relación directa con las empresas y por valores similares”*.

Rodrigo Gómez Peña era en 2008 subsecretario general del PRI, cuando Jaime Mulet presidía ese partido. Ese mismo año, mientras recibía pagos del ex senador Adolfo Zaldívar, formó parte de la Comisión Electoral que elaboró las listas de candidatos que poco después presentarían al Servel para participar en las elecciones municipales. Fue también miembro del Consejo General del PRI. Gómez aparece emitiendo boletas por **\$10 millones** a SQM.

Julieta Florentina Cruz Figueroa aparece entregando boletas a SQM por **\$10 millones**. En 2006, siendo aún militante de la DC, Julieta Cruz fue intendenta de la Región de Atacama. En registros oficiales aparece recibiendo pagos de la DC, pero actualmente no figura en el registro de militantes en la web de ese partido. En 2009 fue candidata a diputada por el Distrito de Vallenar y Caldera,

pero en un cupo del PRI. Desde 2008 figura contratada por la Superintendencia de Insolvencia (dependiente del Ministerio de Economía), donde se desempeña como jefa del Subdepartamento de Servicios Generales y Subdepartamento de Recursos Humanos, recibiendo una remuneración bruta mensual de \$4,5 millones.

Rodrigo Alejandro Vásquez Poblete figura con boletas emitidas a SQM por **\$15 millones**. Vásquez también está vinculado al PRI, partido del que fue candidato a concejal por la comuna de Maipú, sin éxito, en las elecciones municipales de 2008. Al año siguiente se integró al Tribunal Supremo del PRI.

EL SOLITARIO RADICAL

Ignacio Arturo Rojas Rojas es el único radical que se puede identificar en la nómina de personas que incluyó el SII en la ampliación de su denuncia criminal en contra de SQM. La minera le pagó **\$6 millones**. Rojas es periodista y entre 2009 y 2011 recibió honorarios de su partido y también del Comité de Senadores del PRSD. Desde marzo de 2014 tiene un contrato a honorarios en la Subsecretaría de Economía, como apoyo de comunicaciones y coordinación de prensa.